CONGRESO de la REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
26 ENE. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 15:31

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1912/2021-CR Y 2310/2021-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 28238, LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO, A FIN DE RECONOCER CON CRÉDITOS ACADÉMICOS EN LOS ESTUDIOS DE PREGRADO UNIVERSITARIOS AL VOLUNTARIADO CERTIFICADO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Han sido remitidos para estudio y dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte las siguientes iniciativas legislativas:

Proyecto de Ley	Proponente	Grupo Parlamentario	denominación de la propuesta legislativa
1912/2021-CR	Rosangella Andrea Barbarán Reyes	Fuerza Popular	Ley que otorga reconocimiento académico a la labor de voluntariado de los estudiantes universitarios
2310/2021-CR	Miguel Ángel Ciccia Vásquez	Renovación Popular	Ley que modifica la Ley Universitaria Ley 30220 y la Ley 28238, Ley General del Voluntariado

El presente dictamen fue aprobado por mayoría en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, celebrada el 11 de enero de 2023.

Congresistas que votaron a favor[1]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Chiabra León, Paredes Gonzales y Gutiérrez Ticona (miembros titulares).

Congresistas que votaron en abstención: Rivas Chacara y Elías Ávalos (miembros titulares).

I. SITUACIÓN PROCESAL

1.1. Antecedentes procesales

Los proyectos de ley fueron presentados e ingresados a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte conforme se aprecia en el detalle siguiente:

[1] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.

Proyecto de Ley	Fecha de presentación	Fecha de decreto e ingreso a la Comisión	Comisión
1912/2021-CR	29/04/2022	05/05/2022	Educación, Juventud y Deporte
2310/2021-CR	09/06/2022	15/06/2022	Educación, Juventud y Deporte

Las iniciativas legislativas materia del presente dictamen cumplen con los requisitos generales y específicos señalados en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Congreso de la República.

1.2. Contenido de las iniciativas y exposición del problema que se pretende resolver

1.2.1. Proyecto de Ley 1912/2021-CR

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el numeral 100.14 e incorporar el numeral 100.15 en el artículo 100 de la Ley 30220, Ley Universitaria, así como, incorporar el artículo 11-A en la Ley 28238, Ley General del Voluntariado.

En cuanto a la modificación del numeral 100.14 en el artículo 100 de la Ley 30220, Ley Universitaria, la propuesta plantea establecer como uno de los derechos de los estudiantes, obtener el reconocimiento académico por su participación en labores de voluntariado debidamente certificados. También, se observa que el actual numeral 100.14 es trasladado al numeral 100.15 del artículo 100 de la referida ley.

Asimismo, en la incorporación del artículo 11-A en la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, se plantea que el voluntariado sea reconocido en las universidades públicas y privadas como actividad extracurricular, facultando a dichas instituciones educativas para que apliquen los créditos correspondientes. Agrega que, los créditos extracurriculares se obtienen en función de las horas de voluntariado que realicen los estudiantes universitarios en:

- Programas de voluntariado propios de las universidades.
- Programas que funcionan por convenios o alianzas estratégicas entre las universidades y otras entidades.
- Instituciones reconocidas y registradas en el Registro de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Por último, el proyecto de ley señala que el MIMP debe visar las certificaciones obtenidas por los voluntarios en las organizaciones que no formen parte de un programa universitario de voluntariado, para efectos de su reconocimiento en las universidades.

La exposición de motivos del proyecto de ley argumenta que, en la actualidad, el voluntariado de los universitarios se realiza en programas de voluntariado propios de las universidades o en programas que funcionan por convenios o alianzas estratégicas entre las universidades y otras entidades, quedando fuera de dicho ámbito aquel voluntariado efectuado en entidades no vinculadas a las universidades.

1.2.2. Proyecto de Ley 2310/2021-CR

El proyecto de ley tiene como objetivo modificar el numeral 100.14 e incorporar los numerales 100.15 y 100.16 en el artículo 100 de la Ley 30220, Ley Universitaria, estableciendo que los estudiantes tienen derecho, entre otros, al reconocimiento de los certificados por los servicios prestados en organizaciones de voluntarios inscritos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como actividades extracurriculares, otorgándoles los créditos académicos correspondientes.

En concordancia con ello, la iniciativa legislativa propone modificar el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, a fin de que los certificados recibidos por los voluntarios sean considerados para los créditos extracurriculares a favor de los estudiantes de las universidades públicas y privadas, a nivel nacional.

La exposición de motivos del proyecto de ley afirma que, existen estudiantes universitarios durante el proceso de su formación académica realizan actividades no pagadas o remuneradas a favor de personas o instituciones relacionadas con la problemática social humanitaria, las cuales no son reconocidas por sus casas de estudios.

1.3. Opiniones técnicas solicitadas y recibidas

1.3.1. Opiniones solicitadas

Se efectuaron pedidos de opinión a las siguientes instituciones:

Proyecto de Ley	Oficio	Institución	Fecha
1912/2021-CR	712	Ministerio de Economía y Finanzas	26/05/2022
	713	Defensoría del Pueblo	
	955	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	21/12/2022
	956	Ministerio de Educación	
	957	Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria	
2310/2021-CR	290	Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria	26/09/2022
	291	Ministerio de Educación	
	292	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	
	909	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	21/12/2022

1.3.2. Opiniones recibidas

1.3.2.1. Sobre el Proyecto de Ley 1912/2021-CR

1.3.2.1.1. Ministerio de Economía y Finanzas

Mediante el Oficio 673-2022-EF/10.01 del 3 de junio de 2022, el Ministro de Economía y Finanzas remite el Memorando 0232-2022-EF/42.03 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el cual adjunta el Informe 0199-2022-EF/42.03, elaborado por la Oficina de Asuntos Jurídicos Hacendarios, que concluye que el Proyecto de Ley 1912/2021-CR no contiene materia de competencia del citado ministerio, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento.

1.3.2.1.2. Defensoría del Pueblo

Con el Oficio 364-2022-DP/PAD del 16 de junio de 2022, la Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo comunica que el Proyecto de Ley 1912/2021-CR no versa sobre la protección de un derecho fundamental en particular, sino que implica una decisión que corresponde a las atribuciones propias del Congreso de la República; por lo que no emiten opinión sobre la iniciativa.

1.3.2.2. Sobre el Proyecto de Ley 2310/2021-CR

1.3.2.2.1. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Mediante el Oficio D000788-2022-MIDIS-DM del 11 de noviembre de 2022, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social remite el Informe D000631-2022-MIDIS-OGAJ elaborado por la Oficina de General de Asesoría Jurídica, que adjunta el Informe de Trabajo D000003-2022-MIDIS-OGAJ-TCR, que concluye que no corresponde a ese sector emitir opinión respecto a la viabilidad legal, contenido y efectos jurídicos del Proyecto de Ley 2310/2021-CR.

1.3.2.2.2. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Mediante el Oficio 01140-2022-SUNEDU-02 del 23 de noviembre de 2022, el Superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria remite el Informe 768-2022-SUNEDU-03-06, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, el cual contiene la opinión sobre el Proyecto de Ley 2310/2021-CR.

Al respecto, señala que el citado proyecto de ley presenta determinadas observaciones debido a:

- Son las universidades quienes, en el marco de su autonomía, tienen la potestad de diseñar, modificar y aprobar los planes de estudio y la malla curricular de cada uno de los programas de su oferta educativa, por lo que pretender disponer que éstas reconozcan los certificados por los servicios prestados de parte de las organizaciones de voluntarios inscritas conforme a la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, y que, además, sean considerados como actividades extracurriculares otorgándoles créditos académicos, podría generar una afectación a dicha autonomía de la que se encuentran revestidas.
- Equiparar el voluntariado con los créditos extracurriculares supondría su desnaturalización, en tanto sus características primordiales son su ejercicio voluntario y libre, y no en cumplimiento de algún requisito o interés académico, además de su motivación social, y no pecuniaria o impulsada por algún otro beneficio personal.
- Con la modificación del artículo 11 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, se estaría configurando un doble beneficio para los estudiantes por una misma acción, es decir, sería de utilidad tanto para el campo laboral como para el educativo.

1.4. Antecedentes parlamentarios

1.4.1. Proyecto de Ley 7747/2020-PE

El Proyecto de Ley 7747/2020-PE fue presentado por el Poder Ejecutivo. Su objetivo fue proponer una nueva ley general del voluntariado, donde se destaca que los voluntarios inscritos en el Registro del Voluntariado reciban como beneficio, entre otros, canjear las horas de voluntariado acreditadas por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitarios, incluso en la formación técnica productiva y superior tecnológica, de acuerdo con lo establecido en los respectivos reglamentos académicos o de estudios que cada institución educativa haya establecido en el marco de su autonomía.

Fue presentado el 20 de mayo de 2021 y decretado a la Comisión de Mujer y Familia, el 25 de mayo de 2021; sin embargo, fue enviado al archivo el 17 de agosto de 2021 en mérito al Acuerdo del Consejo Directivo N° 19-2021-2022/CONSEJO-CR.

II. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Perú.
- Ley 28238, Ley General del Voluntariado.
- Ley 30220, Ley Universitaria.
- Decreto Legislativo 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Decreto Supremo 003-2015-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado.
- Resolución Ministerial 145-2021-MIMP, Aprueban los "Lineamientos para la Supervisión del Voluntariado en el marco de la Ley General del Voluntariado y su Reglamento".
- Resolución del Consejo Directivo 006-2018-SUNEDU/CD, Aprueban los "Criterios técnicos para supervisar la implementación de planes de estudios adecuados a la Ley Universitaria, con atención de los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 47 de la Ley 30220, Ley Universitaria".

III. ANÁLISIS

3.1. Principales alcances de la educación superior universitaria

En el 2014 se aprobó la Ley 30220, Ley Universitaria, la cual tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, así como promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales de desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.

Con la citada ley se buscó materializar determinados parámetros de la educación en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, estableciéndose que la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica[2].

Entre las diversas disposiciones insertadas en la Ley 30220, Ley Universitaria, se establece que la universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural, adoptando el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial, además de estar integrada por docentes, estudiantes y graduados[3].

Asimismo, el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley 30220, Ley Universitaria, y demás normativa aplicable. La autonomía universitaria, en tanto garantía constitucional, protege a las universidades frente a todo acto externo de los poderes públicos y privados, como también ante los actos internos de los órganos de gestión de la universidad[4].

Esta autonomía se manifiesta en el ejercicio de diversas potestades autodeterminativas[5]:

---

[2] Artículo 18 de la Constitución Política del Perú.
[3] Artículo 3 de la Ley 30220, Ley Universitaria.
[4] Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente 00008-2022-PI/TC del 20 de diciembre de 2022. Fundamento 116.
[5] Artículo 8 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

Régimen normativo	Régimen de gobierno	Régimen académico	Régimen administrativo	Régimen económico
Creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.	Estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo.	Fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, entre otros. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.	Establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.	Administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos.

De otro lado, en su Capítulo IX la Ley 30220, Ley Universitaria, desarrolla las disposiciones relacionadas a los estudiantes universitarios de pregrado, quienes, habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, alcanzando una vacante y se encuentran matriculados en ella[6].

Entre los derechos de los estudiantes que le asiste la mencionada ley, se tienen los siguientes[7]:

- Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas de investigación.
- La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública.

[6] Primer párrafo del artículo 97 de la Ley 30220, Ley Universitaria.
[7] Artículo 100 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

- Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de permanencia, promoción o separación.
- Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas.
- Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través de los procesos electorales internos, de acuerdo con esta Ley y la regulación que establezca cada universidad.
- Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la universidad.
- Tener en las universidades privadas, la posibilidad de acceder a escalas de pago diferenciadas, previo estudio de la situación económica y del rendimiento académico del alumno.
- Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad.
- Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades académicas y de investigación programadas.
- Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la institución universitaria.
- Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o alternos.
- En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera.
- El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de bachiller, por una sola vez.
- Los demás que disponga el Estatuto de la universidad.

Justamente sobre estos derechos versan los objetos de los proyectos de ley, los cuales plantean que, además de los derechos descritos en el párrafo precedente, los estudiantes universitarios tengan derecho al reconocimiento de los certificados por los servicios prestados en voluntariados como actividades extracurriculares y, en consecuencia, obtengan determinados créditos académicos.

Ahora bien, resulta necesario revisar cómo se desenvuelve el régimen de estudios en las universidades sobre el cual se aplicarían los beneficios como consecuencia de las labores de voluntariado.

3.2. Régimen de estudios de las universidades

La citada norma prevé, en su artículo 39, que el régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Asimismo, el crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para lograr aprendizajes teóricos y prácticos. Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo de 16 horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. Los créditos académicos de otras modalidades de estudio, son asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para estudios presenciales.

En efecto, cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país[8]. Por ello, todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada.

En cuanto a la estructura curricular, cada universidad determina el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus especialidades. Cabe mencionar que el currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado.

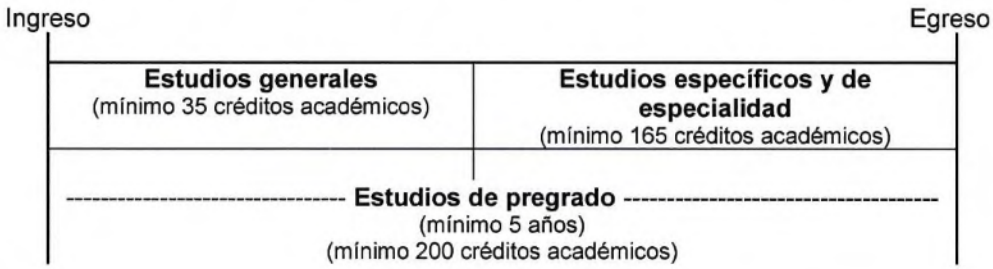
Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo de dos semestres académicos por año. Cada estudio tiene características que conviene detallar:

[8] Artículo 40 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

Estudios generales de pregrado[9]	Estudios específicos y de especialidad de pregrado[10]
Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos.

En otras palabras, los estudios de pregrado deben tener una duración no menor doscientos (200) créditos académicos, lo que se traduce en 3200 horas lectivas, los cuales podrían incluir clases teóricas o prácticas, según cada especialidad.

A continuación, graficaremos lo mencionado para una mejor comprensión:



Es evidente que determinadas especialidades – como son las carreras de derecho o de medicina – tienen una duración de más de 5 años, es decir, se requiere mayor número de créditos académicos para egresar.

Tal como se aprecia, la Ley 30220, Ley Universitaria, establece los parámetros necesarios que aseguren la formación de profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.

Con el marco normativo expuesto relacionado al régimen de estudios de las instituciones educativas superiores, pasaremos a revisar la otra materia sobre el cual versan los proyectos de ley en análisis: el voluntariado.

[9] Artículo 41 de la Ley 30220, Ley Universitaria.
[10] Artículo 42 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

3.3. El voluntariado en el país

En el 2004, con la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, el Estado peruano reconoce el importante aporte del servicio voluntario al país, pues le brinda reconocimiento legal y crea, además, la Comisión Nacional de Voluntariado (CONVOL), cuya finalidad es promover e impulsar el fortalecimiento de la acción voluntaria en el país.

De esa manera, el voluntariado se hace visible, aun cuando la acción voluntaria tiene tradición histórica en el Perú a través de experiencias comunitarias y acciones concretas promovidas por organizaciones nacionales e internacionales. Dicho de otro modo, el trabajo desinteresado y comprometido de los voluntarios ha estado siempre presente en el quehacer nacional, particularmente en situaciones complejas y de urgente necesidad.

Efectivamente, el artículo 2 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, define al voluntariado como la labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidades contractuales. El voluntariado comprende actividades de interés general para la población, como actividades asistenciales, sanitarias, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de saneamiento, vivienda, urbanismo, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado entre otras de naturaleza análoga, tendientes al bien común.

La citada ley agrega que el voluntariado es prestado por una persona natural, peruana o extranjera, u organización de voluntariado y destaca que, en ningún caso, dicha actividad es realizada en forma remunerada ni sustituye al trabajo que se realiza en forma remunerada.

En ese orden de ideas, las organizaciones de voluntariado pueden clasificarse en:

Organizaciones basadas en voluntarios	Entidades con apoyo de voluntarios	Agencias de voluntariado	Otras organizaciones con programas o proyectos de voluntariado
Son organizaciones sin fines de lucro gestionadas por	Son entidades públicas, privadas legalmente	Son organizaciones sin fines de lucro legamente	Son entidades públicas, privadas, o de perfil

voluntarios y que convocan a voluntarios para acciones de proyección social a favor de poblaciones vulnerables.	constituidas u organizaciones sociales de base que convocan voluntarios para fortalecer sus objetivos sociales.	constituidas que articulan la participación de voluntarios en objetivos sociales.	académico, que implementan acciones de voluntariado convocando a los integrantes de su entidad para el apoyo a poblaciones vulnerables en el marco de un programa o proyecto.

Como se puede apreciar, las universidades estarían comprendidas dentro de aquellas organizaciones, públicas o privadas, de perfil académico cuyo diseño curricular contiene acciones de voluntariado en el marco de un programa o proyecto.

En efecto, se puede identificar que la Ley 30220, Ley Universitaria, ha previsto en su Capítulo XIII las normas relacionadas a la responsabilidad social universitaria, la cual es definida como la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; así como, incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas[11].

Sin duda, la responsabilidad social universitaria se encuentra estrechamente relacionada con las labores de voluntariado que se han descrito líneas arriba, por lo que se puede inferir que el enfoque de responsabilidad social que deben tener las acciones de las universidades comprende, entre otras, los voluntariados en favor del desarrollo social y bienestar de la comunidad.

Dada la obligatoriedad de un plan de responsabilidad social que deben diseñar y ejecutar las universidades como parte de sus actividades académicas, veremos más adelante cómo se articulan con el voluntariado y se relacionan con la sociedad.

[11] Artículo 124 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

Retornando a las disposiciones que regula la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, ésta define al voluntario como la persona natural, peruana o extranjera, que promueve y realiza acciones de voluntariado en entidades públicas o privadas, zonas urbanas de poblaciones vulnerables, comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, centros asistenciales de salud pública, entre otras.

Teniendo claro los conceptos de voluntariado y voluntario –necesarios para el presente análisis– pasaremos a describir las características y alcances que comprende el voluntariado en nuestro país.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su rectoría en el Sistema Nacional de Voluntariado[12], tiene la tarea de promover la acción voluntaria y fortalecer su institucionalización, en la medida que los voluntarios aportan al desarrollo del país, coadyuvan al Estado en la atención de poblaciones vulnerables, particularmente en situaciones de desastres.

Los voluntarios pueden acreditar su inscripción en el Registro de Voluntarios del MIMP[13], a fin de ser reconocidos como tales, lo cual permite al ente rector llevar un registro actualizado de los voluntarios, información que, además, coadyuva la articulación con las organizaciones y voluntarios para diversas actividades enfocadas al fortalecimiento de la acción voluntaria tales como la capacitación[14].

Es importante resaltar que el registro de voluntariado es declarativo y no constitutivo de derechos, por tanto, no limita la realización de acciones de voluntariado a quienes no cuenten previamente con la inscripción en el registro.

Asimismo, la incorporación de una certificación a los voluntarios, indudablemente, aporta relevancia a la institucionalización del voluntariado, en la medida que permite contar con un registro de los voluntarios, fortalecer sus capacidades y apoyarlos a su formalización, con lo cual el Estado contribuye a las acciones voluntarias dentro de un segmento de la

---

[12] Literal n) del numeral 3 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

[13] Véase en: https://www.gob.pe/796-inscribirse-en-el-registro-de-voluntariado

[14] Artículo 3 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado.

población y, a su vez, genera un servicio voluntario organizado, liderado por el MIMP como ente rector.

De otro lado, el voluntariado puede ser prestado bajo diversas modalidades[15] que se proceden a detallar:

Voluntariado altruista	Voluntariado de autoayuda	Otras modalidades
Realizado por aquellas personas que actúan de forma espontánea en actividades dedicadas a la lucha contra enfermedades específicas, al bienestar de determinados sectores sociales o, en general, a cualquier actividad en la que el beneficiario sea exclusivamente una tercera persona.	Realizado por aquellas personas que actúan en beneficio de un grupo determinado de personas dentro del cual se encuentra también el voluntario.	Son clasificadas por la Comisión Nacional de Voluntariado y aprobadas e incorporadas a las existentes mediante resolución ministerial del MIMP.

Entre los derechos de los gozan los voluntarios, la norma destaca que reciben una certificación de las actividades realizadas en el servicio de voluntariado desempeñado con especificación de las actividades desarrolladas y de las capacitaciones adquiridas de ser el caso[16], lo que se traduce en el reconocimiento de las labores altruistas desempeñadas por este grupo en favor de la sociedad.

Además del derecho antes destacado, los voluntarios pueden acceder a uno de los siguientes beneficios, en caso la prestación del voluntariado sea mayor a 180 jornadas[17] y siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por el Reglamento de la Ley 28238[18]:

- Acceder a puntaje adicional si postulan a becas nacionales e internacionales que administra el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)

[15] Artículo 8 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de dicha ley.
[16] Numeral 8.8 del artículo 8 del Reglamento de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado.
[17] Conforme al artículo 7 del Reglamento de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, una jornada de voluntariado es entendida como el desarrollo de actividades de voluntariado por un espacio mínimo de tres (3) horas dentro de un día calendario.
[18] Artículo 9 del Reglamento de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado.

o la entidad que haga sus veces; correspondiendo a dicha entidad establecer el valor del puntaje adicional.

- Acceder a puntaje adicional si postulan a programas promovidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el acceso a viviendas de interés social; correspondiendo a dicho sector establecer el valor del puntaje.
- En los casos que la prestación del voluntario sea mayor a dos jornadas y se encuentre inscrito en el Registro de Voluntarios, el voluntario puede acceder a la cobertura del Seguro Integral de Salud, así como a los siguientes beneficios:

  a) Contar con una identificación que acredite su condición de voluntario, otorgada por la organización de voluntariado o por el MIMP.

  b) Recibir una certificación o acreditación de las actividades realizadas en el servicio de voluntariado desempeñado con especificación de las actividades desarrolladas, cantidad de jornadas realizadas y de las capacitaciones adquiridas de ser el caso, por la organización de voluntariado donde realizó las actividades de voluntariado.

  c) El MIMP brinda asistencia técnica a las organizaciones de voluntariado, acorde a la programación que realice y a solicitud de parte, con el objeto de que estas desarrollen los protocolos de intervención correspondientes, según la naturaleza y riesgo de la acción a realizar.

Tal como se evidencia, el Estado peruano, a través de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, ha mostrado esfuerzos denodados a fin de consolidar dicha institución, la cual consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, además que contiene en su esencia un sustancial efecto dominó, pues inspira a otras personas e impulsa las transformaciones sociales.

3.4. Análisis de los Proyectos de Ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR

Como se describió en el acápite 1.2 del presente documento, los Proyectos de Ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR proponen que los certificados por los servicios prestados en voluntariados sean considerados como actividades extracurriculares en los regímenes de estudios de las

universidades, públicas y privadas, y, por tanto, se les otorgue determinados créditos académicos.

En efecto, las exposiciones de motivos de los proyectos de ley materia de análisis señalan que, a la actualidad, diversas universidades han diseñado sus currículos incluyendo actividades de proyección social, las cuales en realidad son voluntariados organizados por las propias casas de estudio, en cuyo caso los estudiantes pueden realizarlas a cambio de créditos académicos, pues son parte de la malla curricular de determinadas especialidades.

Sin embargo, dicha acreditación de voluntariados por créditos académicos no aplica para aquellas labores de voluntariado que son certificados por otras organizaciones, públicas o privadas, distintas a la propia universidad. Por ello, las iniciativas legislativas pretenden resolver dicha situación, de manera que se permita obtener créditos académicos por voluntariados debidamente certificados por entidades no vinculadas a universidades.

En ese sentido, comenzaremos analizando las fórmulas de reconocimiento del voluntariado como actividades extracurriculares, realizados por estudiantes en las universidades del país.

Para empezar, tenemos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cual permite que, durante el semestre académico, los estudiantes puedan realizar actividades extraacadémicas tales como talleres, voluntariados, ser alumno de apoyo y delegado, entre otros. Dado que no existe restricciones sobre el número de veces para realizar una actividad extraacadémica, se puede obtener 4 créditos realizando la misma actividad[19].

De igual manera, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su Dirección Académica de Responsabilidad Social, en consonancia con su objetivo de promover y poner en práctica la responsabilidad social universitaria en su comunidad educativa, propicia la participación de los estudiantes en actividades de voluntariado principalmente de organizaciones externas, así como de proyectos y eventos de la propia dirección[20].

---

[19] Información obtenida en: https://contactoweb.upc.edu.pe/77761-talleres-y-voluntariados/en-un-mismo-semestre-academico-puedo-hacer-cuatro-creditos-extraacademicos

[20] Véase en: https://dars.pucp.edu.pe/que-hacemos/formacion-e-investigacion-academica/voluntariado/presentacion/

Tomando como ejemplo una de las carreras de su oferta educativa, el artículo 47 del Reglamento de la Facultad de Derecho de la citada universidad, establece que se pueden reconocer en conjunto un máximo de nueve créditos computables dentro de la carga académica de cursos electivos, por la realización de las diversas actividades extracurriculares, entre otros, hasta dos créditos por participar en programas de voluntariado de la universidad o de la Facultad por el periodo de dos semestres académicos[21].

Por su parte, el Reglamento de Actividades Extracurriculares de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en su Segunda Disposición Complementaria, establece que los talleres también podrán ser convalidados hasta en dos créditos por actividades de voluntariado, acreditados por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, Decanato, Direcciones de Escuela Profesional (el programa deberá estar registrado en la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social), instituciones regionales, nacionales o internacionales de trayectoria reconocida[22].

De las fórmulas de reconocimiento del voluntariado antes expuestos, se advierte que, efectivamente, el voluntariado es considerado como actividad extracurricular dentro de los estudios de pregrado en varias universidades del país y, por tanto, se le asigna créditos académicos, según lo establezca cada universidad en su normativa interna.

Por tanto, queda claro que, actualmente, las universidades del país, públicas y privadas, brindan reconocimiento al voluntariado otorgándoles determinado número de créditos académicos, que, si bien no es una práctica uniforme ni extendida en todas las casas de estudio, se identifica que muchas de ellas van incluyendo al voluntariado como parte de las actividades extracurriculares o culturales que se fomentan en los estudios de pregrado, como una alternativa fuera del ámbito del plan de estudios normal de la educación superior universitaria.

---

21 Véase en: https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2016/04/22104904/2018001ReglamentoDeLaFacultadDeDerechoEntradaEnVigencia20191.pdf

22 Véase en: https://ffh.unsa.edu.pe/artes/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Reglamento-de-Actividades-Extracurriculares-de-la-UNSA-aprobado-con-RCU.-1.pdf

Ahora bien, no solo en las universidades del país se observa el reconocimiento del voluntariado a través de créditos académicos, sino también se han identificado universidades extranjeras que ofrecen dicho beneficio dentro de su oferta académica:

Universidad Autónoma de Madrid	Universidad de Alicante	Universidad de Chile
Los estudiantes de grado de la facultad pueden obtener reconocimiento académico en créditos, hasta el valor máximo reconocido en su plan de estudios, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.[23]	Ofrece el reconocimiento de créditos para el alumnado de estudios de grado a través de acciones de voluntariado promoviendo que el alumnado contemple la acción voluntaria como una actividad y compromiso integrados en su agenda académica.[24]	A través del programa denominado "Reconocimiento de actividades sociales y comunitarias", los estudiantes de pregrado realizaron actividades relacionadas a la pandemia COVID-19, tales como ollas comunes o voluntariados, entre otras.[25]

Resulta evidente que el reconocimiento de créditos académicos por labores de voluntariado ha sido implementado por universidades extranjeras como una forma de potenciar la acción voluntaria para proporcionar al estudiante una experiencia formativa y humana que contribuya a su desarrollo personal y profesional, con enorme relevancia para la sociedad.

De otro lado, es importante mencionar el proyecto de ley propuesto, en su oportunidad, por el Poder Ejecutivo, pues versa sobre la materia del presente análisis y que fue identificado en el acápite 1.4.1. del presente documento.

En efecto, el Proyecto de Ley 7747/2020-PE fue presentado por el Poder Ejecutivo el 20 de mayo de 2021. Esta iniciativa proponía una nueva ley general del voluntariado, planteando una serie de modificaciones y mejoras normativas que buscaban, entre otros, la actualización conceptual del voluntariado, en atención a la natural evolución de dicha institución.

---

[23] Véase en: https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_Generico_FA&cid=1242657858346&language=es&pagename=FacdMedicina%2FUAM_Generico_FA%2FUAM_generico&pid=1242657858711&title=Reconocimiento+de+cr%3Fditos+por+actividades

[24] Véase en: https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/reconocimiento-de-creditos/reconocimiento-de-creditos-y-acreditacion.html

[25] Véase en: https://www.uchile.cl/noticias/177689/u-de-chile-reconoce-trabajo-social-y-comunitario-de-sus-estudiantes

Uno de los principales argumentos utilizados por el Proyecto de Ley 7747/2020-PE para su planteamiento fueron las recomendaciones contenidas en el Reporte de la Secretaría General sobre Apoyo al Voluntariado como parte de la Agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas de agosto de 2001.

Este reporte propone, entre las medidas de soporte al voluntariado desde los gobiernos, generar marcos normativos o reforzar los existentes, los cuales regulen los derechos y responsabilidades de los voluntarios y las organizaciones, además de proveer las actividades de incentivos tributarios y subsidios a dichas organizaciones.

Dada la importancia de dicho instrumento legal de índole internacional, es que el Poder Ejecutivo propuso la modificación a la normativa nacional que regula el voluntariado. Entre las novedades normativas que se destacan, se encuentra el inciso b) del artículo 17 del Proyecto de Ley 7747/2020-PE, el cual establece los beneficios de los voluntarios inscritos en el Registro Nacional de Voluntariado, que se cita a continuación:

> "**Artículo 17.- Beneficios de los/las voluntarios/as inscritos en el Registro Nacional de Voluntariado**
>
> Los/las voluntarios/as inscritos/as en el Registro Nacional de Voluntariado que cuenten con, al menos, 300 horas de voluntariado acreditadas, en un periodo de dos años contados desde la acumulación total de las horas señaladas, podrán acceder a los siguientes beneficios, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa correspondiente:
>
> a) Acceder a puntaje adicional en la Fase de Preselección, si postulan a becas nacionales e internacionales que administra el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) o la entidad que haga sus veces.
>
> b) **Canjear las horas de voluntariado por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado, o la formación técnico-productiva y superior-tecnológica, de acuerdo con lo establecido en los respectivos Reglamentos Académicos o de Estudios que cada institución educativa haya establecido en el marco de su autonomía.**" (El resaltado es nuestro)

Tal como se aprecia en la citada iniciativa, se eleva a rango de ley los beneficios dispuestos en el Reglamento vigente de la Ley 28238, y se agrega el canje de horas de voluntariado por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de posgrado universitarios y no universitarios –pues incluye a la formación técnico productiva y superior tecnológica–.

Efectivamente, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 7747/2020-PE señala que dicha disposición tiene sustento en las recomendaciones dadas por la Organización de las Naciones Unidas a los gobiernos que la conforman mediante su Resolución A/RES/56/38 aprobada por la Asamblea General el 10 de enero de 2002[26].

La Resolución A/RES/56/38 contiene una serie de recomendaciones sobre las maneras en que los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas pueden apoyar al voluntariado, garantizando la incorporación del voluntariado en la formulación y aplicación de las políticas. A continuación, replicaremos las recomendaciones que forman parte del apoyo de los gobiernos al voluntariado:

- Aumento de la sensibilización de la opinión pública acerca de la importante aportación de las actividades voluntarias al funcionamiento socioeconómico de sus comunidades, entre otras cosas mediante actividades de información pública y actos públicos.
- Adopción de medidas generales relativas al estímulo y la facilitación, la preparación, la capacitación y el reconocimiento de los voluntarios.
- Marcos fiscales, legislativos y de otro tipo, propicios, incluso para las organizaciones con base en la comunidad y las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a actividades de voluntarios.
- Fomento y realización de estudios de investigación sobre los diversos aspectos del voluntariado y sus efectos sobre la sociedad.
- Acceso de los ciudadanos a información sobre oportunidades para ejercer actividades voluntarias.
- Estudio de los posibles efectos de las políticas socioeconómicas generales sobre las oportunidades y la disposición de los ciudadanos para realizar actividades voluntarias.

---

26 Véase en: https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_88/pdfs/44.pdf

- Integración del voluntariado en los planes de desarrollo nacional, reconociendo la contribución que puede hacer el voluntariado al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
- Participación de todos los grupos de la población.

Sobre esta última recomendación, la Asamblea General destaca la promoción del voluntariado en los establecimientos de enseñanza y los servicios dirigidos a la juventud, formular programas concretos que alienten el voluntariado entre los jóvenes, establecer sistemas de reconocimiento y acreditación del servicio voluntario prestado por los jóvenes; y, trabajar con los medios de información para presentar una imagen atractiva del voluntariado. Además, señala que ello puede aumentar considerablemente el nivel de participación de los jóvenes y constituir una buena inversión en los recursos humanos de un país[27].

Es en ese contexto normativo internacional que el Poder Ejecutivo presentó la iniciativa, recogiendo las recomendaciones emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, necesarias para abordar las actividades voluntarias de manera estratégica como medio para ampliar los recursos, afrontar los problemas mundiales y mejorar la calidad de vida de la población.

Es menester mencionar que este contexto normativo internacional nace como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual adopta un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas realizada en septiembre de 2015, cuya finalidad es acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y abordar el cambio climático para 2030. Estos objetivos globales son universales, inclusivos y señalan un compromiso audaz con las personas y el planeta.

Como se explicará en los siguientes párrafos, el voluntariado es una institución que ha sido recogida por los gobiernos como vehículo para el desarrollo sostenible, es decir, que permita ejecutar los 17 ODS, que se pasan a detallar:

	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Detalle
1	**Fin de la Pobreza**	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

[27] Resolución A/RES/56/38 aprobada por la Asamblea General. Quincuagésimo sexto periodo de sesiones. Recomendaciones sobre el apoyo al voluntariado. Página 7.

2	**Hambre Cero**	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3	**Salud y Bienestar**	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4	**Educación de Calidad**	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5	**Igualdad de Género**	Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6	**Agua Limpia y Saneamiento**	Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7	**Energía Asequible y No Contaminante**	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8	**Trabajo Decente y Crecimiento Económico**	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9	**Industria, innovación e infraestructura**	Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10	**Reducción de desigualdades**	Reducir la desigualdad en y entre los países.
11	**Ciudades y comunidades sostenibles**	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12	**Producción y Consumo Responsables**	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13	**Acción por el Clima**	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
14	**Vida submarina**	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15	**Vida de Ecosistemas Terrestres**	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16	**Paz, justicia e instituciones sólidas**	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17	**Alianzas para lograr los objetivos**	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

De lo expuesto, se puede inferir que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce explícitamente a los grupos de voluntarios como partes interesadas para lograr los 17 ODS, pues el voluntariado puede ayudar a expandir y movilizar a los electores, y a involucrar a las personas en la planificación e implementación nacional de los ODS; así como los grupos de voluntarios pueden ayudar a localizar la nueva agenda proporcionando nuevos espacios de interacción entre gobiernos y personas para acciones concretas y escalables.

Simplemente –tal como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas– no es posible alcanzar los ODS sin una amplia gama de personas involucradas en todas las etapas, en todos los niveles, en todo momento. Por ello, se sostiene que el voluntariado es un medio poderoso para atraer a más personas al redil.

Por su propia naturaleza, el voluntariado permite que las personas y las comunidades participen en su propio crecimiento. A través del voluntariado, los ciudadanos desarrollan su resiliencia, mejoran su base de conocimientos y adquieren un sentido de responsabilidad por su propia comunidad. La cohesión social y la confianza se fortalecen a través de la acción voluntaria individual y colectiva, lo que lleva a resultados sostenibles para las personas, por las personas.

Asimismo, el voluntariado fortalece el compromiso cívico, salvaguarda la inclusión social, profundiza la solidaridad y consolida la propiedad de los resultados de desarrollo. Es importante destacar que el voluntariado tiene un efecto dominó. Inspira a otros y promueve las transformaciones necesarias para que los ODS echen raíces en las comunidades.

Muchos de los ODS requieren cambios de actitud y comportamiento a largo plazo, por ejemplo, en la forma en que vivimos juntos o en la forma en que consumimos. Los voluntarios facilitan cambios en la forma de pensar creando conciencia o defendiendo esos cambios e inspirando a otros.

Finalmente, los ODS requieren una "revolución de datos" para recopilar y analizar datos desglosados para monitorear el progreso. Los voluntarios pueden ayudar a medir el progreso en la implementación de los ODS mediante la recopilación de datos, brindando experiencia y apoyando formas participativas de planificación y monitoreo. El voluntariado, como forma de compromiso cívico, es una forma de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas Estado-ciudadano para las próximas décadas.

Oficialmente, la Resolución de la ONU "Integración del voluntariado en la paz y el desarrollo: el plan de acción para la próxima década y más allá" , adoptada por consenso por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2015, reconoce que el voluntariado puede ser un medio poderoso para la implementación de los ODS[28].

En la citada Resolución, la Asamblea General también reconoce el Plan de Acción para la próxima década y más allá (2016-2030), que tiene como objetivo integrar el voluntariado en las políticas y programas de paz y desarrollo a través de un enfoque estratégico y colectivo a largo plazo que sea coherente con los esfuerzos para implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Continuando con el análisis, es importante mencionar a las organizaciones de voluntariado que operan en el país, situación que permite tener amplias áreas de intervención donde los jóvenes pueden prestar su apoyo altruista, que pasaremos a detallar[29]:

Organizaciones de voluntariado	Objetivos que persiguen
ONG Voluntariado en Perú	Esta asociación lleva a cabo acciones en varios ámbitos, pudiendo ayudar en voluntariados relacionados con el medio ambiente, con familias, con niños huérfanos o con personas con algún tipo de discapacidad.
Cooperar Perú	El programa de voluntariado cuenta con una serie de actividades que permite al voluntario involucrarse en el aspecto educativo, social y cultural de una comunidad rural del Cusco.
Movimiento Manuela Ramos	El movimiento apunta al empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva comprometida con la justicia social, los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.
ESCAES	Trabaja en la zona de Piura y Cajamarca con el objetivo de apoyar la formación de líderes campesinos emprendedores, creativos y responsables, que apuesten por el cambio y el desarrollo de sus comunidades
Kallpa	Apunta a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los sectores menos favorecidos, fortaleciendo su salud integral y habilidades sociales
Tierra de Niños	Promueve y fortalece la autonomía de los niños, niñas y jóvenes de las poblaciones pobres del Perú.

[28] Véase en: https://hmong.es/wiki/United_Nations_Volunteers

[29] Información obtenida de: https://gestion.pe/fotogalerias/voluntariado-en-peru-motivos-para-hacer-uno-noticia/

Enseña Perú	Se trata de un proyecto que recluta y capacita a personas que no son docentes para que puedan enseñar durante dos años en colegios de zonas pobres del país.

De la misma manera, se ha identificado que los gobiernos regionales han adoptado, como parte de sus políticas y acciones concretas, medidas orientadas para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y actores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad, a través del voluntariado, según pasaremos a enumerar:

Entidad	Marco legal	Objeto
Gobierno Regional de Cajamarca	Ordenanza Regional Nº D11-2022-GR.CAJ/CR	Declara de interés regional el voluntariado en la región Cajamarca y crea el Programa Regional de Voluntariado del Gobierno Regional de Cajamarca.
Gobierno Regional del Callao	Ordenanza Regional Nº 008	Declara de interés regional la labor del voluntariado que realizan las ciudadanas y ciudadanos de la región Callao, crea el Consejo Regional de Voluntariado de la región Callao, crea e institucionaliza el Programa Regional de Voluntariado del Gobierno Regional del Callao; y, crea e implementa el Registro Regional de Voluntariado de la región Callao.
Gobierno Regional de Moquegua	Ordenanza Regional Nº 004-2022-CR/GRM	Declara de interés regional el voluntariado regional de ciudadanos y ciudadanas en el ámbito jurisdiccional de la región Moquegua.

Por las razones expuestas, se evidencia que el voluntariado debe ser instrumentalizado como un medio para alcanzar los objetivos mundiales, necesarios para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y abordar el cambio climático para 2030 y que, por tanto, al ser incorporados como actividades extracurriculares van a formar parte de los aprendizajes universitarios, con efectos positivos para el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte reconoce el voluntariado como parte del accionar social y, sin duda alguna, que coadyuva al desarrollo de la comunidad, lo que permite tener ciudadanos con los valores interiorizados, lo cual guarda relación con lo ya manifestado por las Naciones Unidas.

Por ello, la Comisión estima necesario abordar la problemática que busca resolver las iniciativas legislativas, pues se ha determinado –del análisis descrito– que, en efecto, las universidades, tanto públicas como privadas, incorporan al voluntariado dentro de los cursos electivos o actividades extracurriculares que componen la malla curricular de las especialidades que brindan en su oferta académica.

Bajo esa premisa, se debe precisar que ello no enerva la vulneración a la autonomía universitaria –como lo afirma la Sunedu–, por el contrario, la autonomía universitaria consiste en el atributo de la autodeterminación para el desarrollo de las actividades y funciones derivadas con fines institucionales. Por tanto, la autonomía universitaria se manifiesta en la potestad de autorregulación, sujeta al marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, la autonomía puede ser objeto de una "determinación legislativa" en cuanto a su extensión, siempre que esta respete y permita desarrollar las ideas nucleares y los contenidos esenciales que la Constitución ha fijado sobre la materia.[30]

Siendo ello así, resulta razonable que se incorporen, en la vigente ley del voluntariado, los beneficios que recibirán los voluntarios inscritos en el Registro del Voluntariado por realizar labores de voluntariado en organizaciones debidamente inscritas en el MIMP, pues el legislador cuenta con plenas facultades para buscar mejoras que contribuyan al principal objetivo de la educación superior universitaria, esto es, la calidad de educación.

El concepto de calidad de educación ya ha sido definido por el máximo intérprete de la Constitución en referencia a dos principios[31]:

- **Desarrollo cognitivo del educando**: Es el objetivo explicito más importante de todo el sistema, y, por consiguiente, el éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido.
- **Promoción de la formación en valores**: La educación fomenta el desarrollo de actitudes y valores relacionados con una buena conducta cívica, así como las condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando.

---

[30] Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente 00008-2022-PI/TC del 20 de diciembre de 2022. Fundamentos 118 y 119.

[31] Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente 0017-2008-AI/TC. Fundamento jurídico 13.

Por ello, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con lo establecido por el Tribunal Constitucional, quien señala que no es posible concebir la educación universitaria solamente como la impartición de enseñanza en las aulas, sino que debe promoverse una educación integral con una preocupación de formar además de buenos profesionales, buenas personas para nuestra sociedad, cuya formación en valores debe promoverse.

Por las razones expuestas, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte considera pertinente recoger el planteamiento que fue propuesto en su oportunidad por el Poder Ejecutivo, cuyo planteamiento es similar a la contenida en las iniciativas legislativas.

Para dicho efecto, se plantea modificar el artículo 10 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, que regulaba las facilidades que debía otorgar el Estado al voluntariado en términos genéricos que a su vez ya estaban previstos en el artículo 3A de la referida ley, sobre el Rol facilitador del Estado; en ese sentido, se sustituye por la nueva propuesta de artículo 10 que regula los beneficios de los voluntarios inscritos y activos en el Registro de Voluntariado, con las siguientes modificaciones normativas:

- Se eleva a norma con rango de ley el beneficio de acceder a puntaje adicional en la fase de preselección en postulaciones a becas nacionales e internacionales que administra el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo o la entidad que haga sus veces.
- Se incorpora el beneficio de reconocer con créditos académicos en los estudios de pregrado universitarios a las labores de voluntariado que estén debidamente certificados por una organización supervisada por el MIMP.

Para ambos casos, se plantea que, para otorgarse dichos beneficios, se deba contar como mínimo con ciento (100) jornadas de voluntariado debidamente acreditadas, que equivale a trescientas (300) horas de voluntariado, durante un periodo que no exceda los dos (2) años; periodo que esta Comisión considera razonable por cuanto se trata de labores altruistas cuya naturaleza es ser complementaria a la vida universitaria de los estudiantes que la practican.

Asimismo, se propone una disposición complementaria final que dispone que la Sunedu apruebe las disposiciones necesarias para la mejor aplicación de lo propuesto.

De esta manera, lo que se pretende con esta fórmula legal sustitutoria es fomentar esta loable labor altruista, cuyos beneficios no solo comprenderán al propio estudiante sino, también, coadyuvará al bienestar de la sociedad, a través de incentivos académicos.

El planteamiento propuesto se encuentra plenamente respaldado por la supervisión del voluntariado que realiza la Dirección de Voluntariado del MIMP, órgano de línea que recolecta y analiza la información sobre las acciones de voluntariado que desarrolla una organización para constatar el cumplimiento de la normativa vigente en dicha materia, la cual se realiza de las siguientes formas[32]:

Tipo de supervisión	Detalle
Aleatoria y de oficio	Iniciada por la Dirección de Voluntariado, partiendo de la base de organizaciones de voluntariado inscritas en el Registro de Voluntariado
A solicitud de parte	Requerida por el beneficiario, voluntario, representante de organización de voluntariado u otro miembro del ente competente, a través de una carta presentada en mesa de partes del MIMP dirigida a la Dirección de Voluntariado en forma presencial o virtual. No son consideradas las solicitudes anónimas
A través de la información que reportan las organizaciones de voluntariado, voluntarios o beneficiarios	-

Dicha supervisión puede culminar en *´Cumplimiento* de la normativa´ o en *´Incumplimiento* de la normativa vigente sobre voluntariado por parte de la organización supervisada, así como las recomendaciones para mejorar la implementación del voluntariado´. En este último supuesto, el MIMP a través de su órgano competente tomará las acciones correspondientes respecto de dicha organización.

Es preciso indicar que durante el debate del presente instrumento procesal parlamentario, la congresista Infantes Castañeda sugirió que en el literal b

[32] Numeral 6.3 del acápite VI de los "Lineamientos para la Supervisión del Voluntariado en el marco de la Ley General del Voluntariado y su Reglamento", aprobado con la Resolución Ministerial 145-2021-MIMP.

del artículo 10 cuya modificación se propone en el texto sustitutorio se reemplace el término "canjear" por el de "reconocer" los créditos académicos; de esta manera los voluntarios inscritos tienen entre otros beneficios el reconocimiento de las horas de voluntariado acreditadas por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitarios (...).

IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, en el presente dictamen vamos a realizar un análisis que identifique el costo de la medida que plantean los proyectos de ley.

Involucrados	Efectos directos	Efectos indirectos
Estudiantes de pregrado	○ Fortalecer el perfil personal y profesional de los jóvenes, al desarrollar habilidades socioemocionales, como la proactividad, la empatía y la vocación de servicio, y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. ○ Desarrollar habilidades blandas. ○ Conocer más de la realidad local y social de determinada circunscripción. ○ Adquirir experiencia en determinado rubro.	○ Impactar de manera positiva en la comunidad. ○ Convertirse en agente de cambio, sumando fuerzas para mejorar la sociedad o el medio ambiente.
Universidades y el Estado	La medida redundará favorablemente en la formación de profesionales que brinda la universidad, con sentido de ciudadanía y compromiso con la sociedad.	Mejora en la calidad del servicio educativo universitario que se presta en las universidades públicas y privadas.
Sociedad	Aumentar la productividad, pues los voluntarios invertirán tiempo con una actividad muy importante como el voluntariado.	Mejores profesionales idóneos para el desarrollo de la sociedad, además de contribuir con el desarrollo de la comunidad.

V. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de conformidad con el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso

de la República, recomienda la **APROBACIÓN** de los Proyectos de Ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR, con el siguiente texto sustitutorio:

TEXTO SUSTITUTORIO

El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 28238, LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO, A FIN DE RECONOCER CON CRÉDITOS ACADÉMICOS EN LOS ESTUDIOS DE PREGRADO UNIVERSITARIOS AL VOLUNTARIADO CERTIFICADO

Artículo único. Modificación del artículo 10 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado

Se modifica el artículo 10 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, en los siguientes términos:

"Artículo 10.- Beneficios de los voluntarios

Los voluntarios inscritos y activos en el Registro del Voluntariado que cuenten con, al menos, cien (100) jornadas de voluntariado acreditadas, en un periodo de dos (2) años contados desde la acumulación total de las jornadas señaladas, podrán acceder a los siguientes beneficios, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa correspondiente:

a) Acceder a puntaje adicional en la Fase de Preselección, si postulan a becas nacionales e internacionales que administra el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo o la entidad que haga sus veces.

b) El reconocimiento de las horas de voluntariado acreditadas por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitarios, en la formación técnico productivo y superior tecnológica, de acuerdo con lo establecido en los respectivos reglamentos académicos o de estudios que cada institución educativa haya establecido en el marco de su autonomía".

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1912/2021-CR Y 2310/2021-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 28238, LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO, A FIN DE RECONOCER CON CRÉDITOS ACADÉMICOS EN LOS ESTUDIOS DE PREGRADO UNIVERSITARIOS AL VOLUNTARIADO CERTIFICADO

ÚNICA. Adecuación del reglamento y otras disposiciones

El Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta (60) días calendario, adecúa el reglamento de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, a lo previsto en la presente ley. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria aprueba las disposiciones que resulten necesarias para la mejor aplicación de la presente norma.

Dese cuenta
Sala de Comisiones.
Lima, 11 de enero de 2023.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 09:34:59-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 08:07:36-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ TICONA Paul Silvio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 14:42:17-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: INFANTES CASTAÑEDA Mery Eliana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 10:38:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 11:24:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 12:33:09-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HUAMAN CORONADO Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 17:47:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIABRA LEON Roberto Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 15:11:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Maria Del Pilar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:20:46-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** marzo **de** 2023

Al orden del día

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1912/2021-CR Y 2310/2021-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 28238, LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO, A FIN DE RECONOCER CON CRÉDITOS ACADÉMICOS EN LOS ESTUDIOS DE PREGRADO UNIVERSITARIOS AL VOLUNTARIADO CERTIFICADO

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:38:09-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO FIR 21456255 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:55:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/01/2023 11:38:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUISPE MAMANI Wilson Rusbel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 13:00:38-0500

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL)
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023

Presidida por la congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga

A las 15 horas y 12 minutos en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo, se pasó lista[1] a la que contestaron, de manera presencial, los congresistas Flavio Cruz Mamani, Alex Antonio Paredes Gonzales y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (miembros titulares); y, de manera virtual, a través de la Plataforma Microsoft Teams, los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani, Juan Carlos Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Mery Eliana Infantes Castañeda, Tania Estefany Ramírez García, Roberto Chiabra León y José Luis Elías Ávalos (miembros titulares).

Con LICENCIA las congresistas Flor Aidee Pablo Medina y Karol Ivett Paredes Fonseca (miembros titulares).

Con el *quorum* de Reglamento, la **PRESIDENTA** inició la sesión.

Se dejó constancia de la dispensa presentada por el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya (miembro titular).

—o0o—

I. ORDEN DEL DÍA

En este estado, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía escuchar la sustentación a cargo del congresista Waldemar José Cerrón Rojas, como autor del Proyecto de Ley 3886/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 31495, Ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada.

[1] Durante el desarrollo de la sesión, se unieron, de manera virtual, los congresistas Eduardo Enrique Castillo Rivas, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Janet Milagros Rivas Chacara, Roberto Helbert Sánchez Palomino y Noelia Rossvith Herrera Medina (miembros titulares).

Con ese fin, le ofreció el uso de la palabra.

El congresista **CERRÓN ROJAS** comentó que el proyecto de ley tiene por objeto reconocer el derecho de los docentes cesantes, jubilados, activos, contratados, auxiliares y herederos legales de los servidores fallecidos, en sede administrativa, así como contrarrestar la asimetría e inequidad de sueldos y prosecución del salario justo y digno del trabajador docente.

Explicó que la modificación de los artículos 1, 2, 3 de la Ley 31495 propone incluir a los docentes jubilados, auxiliares y herederos legales de los servidores fallecidos, en sede administrativa como beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley 25212, tomando como base la remuneración total sin exclusión de conceptos remunerativos.

Seguidamente, agregó que en el artículo 1 modificado se agrega un párrafo que dispone que la liquidación de dichas bonificaciones se realiza determinando su valor actualizado empleando la tasa de interés legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1236 del Código Civil correspondiente al periodo comprendido entre el inicio de cada beneficio hasta la fecha de su liquidación. A su vez, agregó que en el artículo 3 modificado se señala que a los servidores cesantes del Decreto Ley 20530, por su condición especial, se les aplica desde el 21 de mayo de 1990 hasta la actualidad lo dispuesto, y la modificación de su estructura remunerativa pensionaria, considerando, además, la remuneración de viceministro de Estado para quienes alcanzaron el V Nivel Magisterial.

Sobre la incorporación del artículo 7 a la Ley 31495, dijo que se plantea que los años de contrato deban ser contabilizados como años de servicios que se acreditan con las planillas de remuneraciones de los servidores, sobre los que se aplica el reconocimiento y pago de las bonificaciones establecidas en la presente disposición normativa propuesta, sin ninguna otra condición.

Indicó que el proyecto de ley incorpora, también, la tercera disposición complementaria, la cual deja sin efecto el artículo 134.3 del Decreto Supremo 004-2013-ED, en el extremo que precisa que no son considerados como años de servicios las resoluciones por reconocimiento de pago.

Sostuvo que el Poder Judicial adoptó criterios que excluyeron conceptos remunerativos "por ley expresa", ordenando y aprobando peritajes judiciales con liquidaciones reducidas, basándose en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 31495. Señaló que dichas decisiones administrativas y judiciales vulnera el principio de legalidad e interpretación favorable al trabajador, toda vez

que resultan contrarias a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado, el cual no establece la exclusión de conceptos remunerativos por ley expresa.

Por otro lado, mencionó que la Corte Suprema ha establecido que el beneficio de bonificación especial por preparación de clase y evaluación debe ser calculado en función a la remuneración total o íntegra, es decir, todos los ingresos percibidos mensualmente por el docente.

Dijo que existe una amplia jurisprudencia que otorga el marco legal suficiente para la aprobación de lo dispuesto en el proyecto de ley y puso como ejemplo la Casación N° 5318-2016-LIMA de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema que reitera no solo el criterio uniforme para el cálculo de la bonificación, sino también establece que la sentencia favorece procesalmente a la parte demandante, por lo cual queda descartado que la remuneración se vea reducida.

Terminada la exposición, la **PRESIDENTA** ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

El congresista **CRUZ MAMANI** señaló que el Ministerio de Educación aún no ha reglamentado la Ley 31495, lo que podría ser una ventaja para realizar unos ajustes a la norma.

De otro lado, comentó que el Ministerio de Economía y Finanzas se basa en el Informe Legal N° 524 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para reconocer o no si el docente realmente es merecedor de recibir las bonificaciones que les corresponde. Advirtió que, a pesar de haber sido más de 10 años de encontrarse en esta situación, ni SERVIR, ni el Poder Ejecutivo han brindado alguna norma legal vinculante para decidir sobre este tipo de casos.

Sugirió revisar bien los términos que se incluyen en el texto legal al momento de elaborar el predictamen en referencia a los retirados, cesados, jubilados y otros grupos de docentes que pueden terminar viéndose excluidos de los beneficios de la ley.

Por su parte, el congresista **PAREDES GONZALES** dijo que más de 12 mil docentes de la región Arequipa, la cual representa, hicieron el reclamo correspondiente y han recibido sus beneficios luego de un largo proceso judicial. Comentó que, en ese contexto, la Ley 31495, por más que busca facilitar el pago de beneficios a los docentes, no fue reglamentada en el plazo otorgado, lo cual brinda una oportunidad para realizar ajustes a la redacción del texto legal.

Informó que el grupo de trabajo que coordina ha trabajado progresivamente para resolver los problemas y limitaciones de lo dispuesto por la norma y señaló que se

había programado una reunión con representantes del Ministerio de Educación para reglamentar la Ley 31495.

La **PRESIDENTA** explicó que con la Ley 31495 se unificaron todas las bonificaciones para que pasen a formar parte de la remuneración del docente.

El congresista **PAREDES GONZALES** precisó que la dación de la Ley 31495 se logró para evitar que los docentes interpongan una acción judicial, toda vez que, dada la jurisprudencia previa, el resultado sería beneficioso para el demandante. A su vez, señaló que, de acuerdo con la opinión de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ello coadyuvaría a aliviar la carga procesal.

La **PRESIDENTA** consultó cuál sería el objeto de reglamentar una norma si, con la aprobación de la Ley 31495, se entiende que las bonificaciones se subsumen en el sueldo mensual y se modifica la remuneración total.

El congresista **PAREDES GONZALES** manifestó que precisamente ello es lo que se debe precisar, toda vez que se hacen interpretaciones unilaterales de lo dispuesto en la ley.

La **PRESIDENTA** dijo que con la aprobación del proyecto de ley sustentado se estaría creando una nueva bonificación y que es necesario analizar la propuesta más a fondo a fin de dar una solución viable para el problema comentado.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista anunció que el proyecto de ley seguiría el trámite de Reglamento.

—o0o—

Continuando, la **PRESIDENTA** manifestó que conforme al orden de la agenda correspondía escuchar a la congresista Margot Palacios Huamán, quien sustentaría el Proyecto de Ley 1049/2021-CR de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley de creación de la Universidad Nacional Científica Intercultural del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; sin embargo, anunció que la legisladora había presentado una solicitud para reprogramar su presentación, por lo que prosiguió con el siguiente punto de la agenda.

—o0o—

La **PRESIDENTA** dijo que correspondía escuchar la sustentación del congresista Guido Bellido Ugarte del Proyecto de Ley 1565/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que crea la Universidad Nacional del VRAEM.

Con ese fin, le ofreció el uso de la palabra.

El congresista **BELLIDO UGARTE** señaló que el proyecto de ley es una demanda legítima que beneficiaría a los habitantes de las regiones Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurímac, las que tienen pocas vías de comunicación con el resto del país y que fueron consideradas como ámbito de aplicación de la Estrategia Nacional de Crecimiento en el año 2007.

Expuso que el proyecto de ley tiene por objeto regular la creación e implementación progresiva de la Universidad Nacional del VRAEM, con personería jurídica de derecho público interno, con sede en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en la ciudad de Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco.

Explicó que se ha propuesto al distrito de Pichari como localidad en la que se encontraría la Universidad Nacional del VRAEM debido a que pertenece al área de intervención directa del VRAEM, cuenta con diversas vías y canales de comunicación, es uno de los distritos con mayor número de habitantes en su área de influencia, colinda con otros distritos que tienen una amplia demanda de acceso a la educación superior y su posición geográfica le permite ser el centro económico comercial de la zona.

Comentó que solo un pequeño porcentaje de la población ha podido acceder a estudios de educación superior universitaria, lo cual ha generado que se incrementen los índices de migración de esta zona a otras partes del país con mejores oportunidades.

Solicitó el apoyo de los señores congresistas para la aprobación del predictamen correspondiente, toda vez que la creación de universidades promete mejorar las condiciones de vida de las personas que se ven beneficiadas. Asimismo, pidió a la Presidenta atender lo solicitado en el Oficio N° 808-2022-2023-GBU/CR, de fecha 3 de enero de 2023, para la programación de sustentación de los proyectos de ley 1176/2021-CR, 1945/2021-CR, 2620/2021-CR y 2619/2021-CR.

La **PRESIDENTA** dijo que se realizarían las coordinaciones para atender lo solicitado y comentó que existen las iniciativas 3517/2022-CR y 1049/2021-CR con contenido similar al proyecto sustentado que difieren en la ubicación en la que se encontraría la Universidad Nacional del VRAEM. Pidió a los señores congresistas debatir dicho aspecto de la propuesta para lograr un consenso.

Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista agradeció la presentación realizada y anunció que el proyecto de ley seguiría el trámite de Reglamento.

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que, de acuerdo con lo programado en la agenda, correspondía escuchar la sustentación del congresista Wilson Soto Palacios del Proyecto de Ley 3517/2022-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la "Universidad Nacional Autónoma del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro – UNAVRAEM".

Manifestó que el congresista Wilson Soto Palacios no se encontraba conectado en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso en esos momentos y que se coordinará con su despacho a los efectos de reprogramar su presentación.

Dicho esto, continuó con el siguiente punto de la agenda.

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** anunció que la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, quien debía sustentar el Proyecto de Ley 1919/2021-CR de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de techos en los espacios abiertos de los centros de educación básica regular del país, ha solicitado la reprogramación de la sustentación debido a actividades parlamentarias previamente agendadas; con ese fin, dispuso se coordine con el despacho de la citada parlamentaria.

—o0o—

En este estado, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía escuchar la sustentación de la congresista Noelia Rossvith Herrera Medina del Proyecto de Ley 2932/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Nacional de Marañón en el departamento de Huánuco.

Con dicha finalidad, le ofreció el uso de la palabra.

La congresista **HERRERA MEDINA** señaló que el proyecto de ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Nacional de Marañón, con sede en la provincia de Marañón, departamento de Huánuco.

Dijo que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Marañón, con cargo a su presupuesto anual, deben promover el desarrollo de los estudios técnicos para la construcción de la referida universidad y su inclusión dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE.

Explicó que actualmente existe en Huánuco la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, sin embargo, su ubicación dificulta el acceso a la población que reside en zonas alejadas y ello genera costos adicionales como alojamiento, alimentación y traslados, además de los materiales de estudio que los universitarios, de por sí, ya deben cubrir.

Precisó que la provincia de Marañón cuenta con más de 26 mil habitantes, de acuerdo con el Censo Nacional realizado en el 2017, por lo cual, crear una universidad ubicada en esta provincia responde a una demanda legítima de la población del Marañón, pues reclama acceso a la educación superior para mejorar sus condiciones de vida y contar con mayores oportunidades de empleo.

Indicó que el proyecto de ley sustentado no irroga gastos al erario nacional y busca promover la inclusión de los ciudadanos a la educación superior universitaria para disminuir las brechas de pobreza.

La **PRESIDENTA** agradeció la exposición realizada y ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista anunció que el proyecto de ley seguiría el trámite de Reglamento.

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 2394/2021-CR, 2458/2021-CR y 3900/20322-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la "Universidad Nacional Tecnológica de Chincha - UNATECH" de la provincia de Chincha del departamento de Ica.

Sostuvo que los proyectos de ley indican que es de suma importancia la creación e implementación de una universidad pública en la provincia de Chincha, departamento de Ica, toda vez que el crecimiento demográfico y la expansión de la oferta de empleo han mostrado la necesidad de contar con una institución de educación superior de calidad.

Así también, precisó que, según el Censo Nacional del año 2017, la provincia de Chincha tiene 250 mil habitantes, de los cuales aproximadamente el 70% tiene más de 15 años y conforma un grupo que, potencialmente, buscará oportunidades de desarrollo.

Explicó que el cumplimiento íntegro de los requisitos vigentes corresponde a la creación de una universidad pública y no es exigible a las normas declarativas, debido a que en estas se verifica la pertinencia de la creación de una universidad pública, aspecto vinculado a la necesidad de la población y la oferta de empleo que no se cubre por la falta de personal calificado.

Indicó que solo el 34% de la población de Chincha accede a educación superior y que, ante la denegatoria de licencias a las universidades por parte de la SUNEDU, el departamento de Ica solo cuenta con dos universidades licenciadas, las cuales no tienen sede en la provincia de Chincha.

Por lo expuesto, consideró razonable la aprobación de la propuesta que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la "Universidad Nacional Tecnológica de Chincha – UNATECH".

En debate el predictamen, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

El congresista **MUÑANTE BARRIOS** señaló que el fondo de la propuesta es beneficiar a un gran sector de la población de la localidad de Chincha, toda vez que un mínimo porcentaje del total de habitantes tiene la oportunidad de acceder a la educación superior. Por otro lado, mencionó que la provincia de Chincha se encuentra en desventaja en comparación con otras localidades que cuentan con más de una universidad, sea pública o privada. Finalmente, precisó que la aprobación de la iniciativa legislativa no conlleva gasto público al ser una norma declarativa, ni contraviene ninguna disposición legal.

Por su parte, el congresista **MARTICORENA MENDOZA** agradeció el trabajo realizado por la Comisión, toda vez que la propuesta refleja una necesidad que viene siendo reclamada desde hace varios años por la provincia de Chincha.

A su turno, la congresista **HERRERA MEDINA** señaló estar de acuerdo con la propuesta trabajada por la Comisión.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** advirtió que las leyes declarativas son leyes vacías, intrusas y simbólicas, lo cual está establecido en manuales internos del Congreso

de la República. Manifestó que no se puede incluir en el dictamen información que no es cierta.

En una nueva intervención, la congresista **HERRERA MEDINA** afirmó que las iniciativas de ley declarativos son necesarias para impulsar proyectos que requieren inversión y planificación. Cuestionó la observación realizada por el congresista Elías Ávalos dado que, en el caso del citado congresista, dijo, puede haber un conflicto de intereses con la aprobación del dictamen en comentario.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** explicó que, en su momento, el Proyecto de Ley 124/2011-CR, de autoría de la exparlamentaria Ana Jara, fue actualizado con la numeración 373/2016-CR y aprobado en una sesión descentralizada realizada en Ica. Asimismo, comentó que la aprobación de un proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de una universidad debe contar con la opinión previa favorable de los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, así como con los instrumentos de planeamiento para la creación de una institución de educación superior. Señaló que no se ha detallado cómo se garantizará la conveniencia y pertinencia con las políticas regionales y nacionales de educación universitaria, tampoco la vinculación de la oferta educativa propuesta a la demanda laboral, no se ha demostrado la disponibilidad de recursos humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Dijo que la propuesta contraviene el artículo 78 y 79 de la Constitución Política del Perú, toda vez que el cumplimiento de las ocho condiciones básicas de calidad dispuestas por la SUNEDU significa el desembolso de recursos públicos.

Por otro lado, agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas emitió opinión desfavorable sobre el proyecto de ley. Expresó su preocupación por el análisis territorial contenido en el predictamen que no considera necesario el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y, sin embargo, ordena al Ministerio de Educación que el cumplimiento de estas será efectivo al momento de la implementación de lo dispuesto en la norma.

Dijo que, en el punto 3.2 del análisis del predictamen se argumenta que en el departamento de Ica solo tiene licenciamiento la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Privada San Juan Bautista; sin embargo, actualmente se encuentran funcionando en la provincia de Chincha sedes de la Universidad San Luis Gonzaga, de la Universidad Privada de Ica y de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Observó que hay errores de redacción en las palabras "patente" y "Chincha" en el punto 3.4 del análisis del predictamen y en el artículo único del texto legal de la propuesta, respectivamente.

La **PRESIDENTA** señaló que no comparte los criterios referidos por el congresista José Luis Elías Ávalos sobre la esencia de los proyectos de ley declarativos, toda vez que ponen en agenda una necesidad de una comunidad que, en este caso, está ávida de tener un centro de estudios superiores. No obstante, agradeció las observaciones que buscan mejorar el trabajo realizado por la Comisión.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** explicó que hubo una mala interpretación de sus palabras toda vez que lo señalado se encuentra en el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** dijo que, por lo comentado, habría algún interés particular en observar el predictamen. Manifestó que todos los proyectos de ley declarativos reflejan las demandas de una población y son solo el primer paso para la posterior implementación de este. Aclaró que no se puede negar que todas las universidades deben cumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU; sin embargo, por el momento no es pertinente abordar ese punto toda vez que el proyecto de ley se limita a declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de una universidad. Solicitó someter el predictamen al voto.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** negó la existencia de algún conflicto de interés y adelantó su voto a favor de la propuesta; aun así, dijo que es importante corregir las observaciones formuladas a fin de mejorar los aspectos técnicos analizados.

El congresista **QUISPE MAMANI** manifestó que elaborar proyectos de ley declarativos es obligación de todos los congresistas, dado que estos exponen las necesidades de un sector de la población. Recordó a los presentes que lo propuesto en las iniciativas legislativas no deben significar el uso de recursos públicos, de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política del Perú; sin embargo, sí se puede declarar la necesidad de implementar un proyecto, de acuerdo con lo que la población solicita.

El congresista **HUAMÁN CORONADO** consideró que los proyectos de ley declarativos son un llamado de atención a otras instancias del Estado para que, en su momento, se pueda ejecutar lo dispuesto en la norma.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, la **PRESIDENTA** dio por agotado el debate y con los aportes brindados sometió el dictamen a votación.

El predictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2394/2021-CR, 2458/2021-CR y 3900/2022-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos y Marticorena Mendoza (miembros titulares)".

—o0o—

Continuando con lo programado en la agenda, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 810/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

Señaló que la propuesta busca modificar el artículo 61 del Decreto Legislativo 1496 con la finalidad de que el requisito para ser elegido rector de una universidad que consiste en haber obtenido el grado de doctor bajo la modalidad presencial, sea ampliado a las modalidades semipresencial o a distancia y, además, incorpora el requisito de contar con una trayectoria de investigación.

Indicó que la propuesta no resulta atendible toda vez que no se cuenta con una fundamentación fáctica y jurídica, debido a que sería necesario modificar los requisitos similares para ser superintendente nacional de la SUNEDU, vicerrector, decano y profesor ordinario principal; es decir, no se advierte el universo de beneficiarios de la referida iniciativa legislativa ni el problema que se pretende resolver con la aprobación de esta iniciativa legal.

De otro lado, dijo que el estándar 10 del Modelo de Calidad para la Acreditación de Programas de Estudios de Posgrado, elaborado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación - SINEACE, dispone que el programa de doctorado debe contar con mecanismos que aseguren, entre otros, la pertinencia y la disponibilidad de recursos bibliográficos (físicos o digitales) con una antigüedad no menor de cinco años; por lo cual, un programa de doctorado a distancia tendría que asegurar la disponibilidad de recursos bibliográficos físicos al alumno o el acceso a bases de datos de prestigio internacional a través de convenios y del correspondiente pago de los derechos de uso.

Por lo expuesto, recomendó la no aprobación del Proyecto de Ley 810/2021-CR.

A continuación, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, dio por agotado el debate y sometió a votación el predictamen en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación[2] del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 810/2021-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Mori Celis, Castillo Rivas[3], María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina y Sánchez Palomino[4] (miembros titulares).

Congresista que votó en abstención: Elías Ávalos (miembro titular)".

—o0o—

A continuación, La **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, a fin de reconocer con créditos académicos en los estudios de pregrado universitarios al voluntariado certificado.

Explicó que diversas universidades han diseñado sus currículos incluyendo actividades de proyección social, las cuales en realidad son voluntariados organizados por las propias casas de estudio, en cuyo caso los estudiantes pueden realizarlas a cambio de créditos académicos; sin embargo, la acreditación de voluntariados por créditos académicos no aplica para las labores de voluntariado certificadas por otras organizaciones públicas o privadas.

Señaló que existe un antecedente en el Proyecto de Ley 7747/2020-PE, cuyo texto legal establecía el canje de horas de voluntariado por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitario, incluyendo la formación técnico productiva y superior tecnológica. Indicó que dicha propuesta acoge las recomendaciones dadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/56/38 del 10 de enero de 2002, relacionadas al apoyo al voluntariado por parte de los gobiernos.

Por lo expuesto, solicitó el voto a favor del predictamen que eleva a norma con rango de ley el beneficio de obtener puntaje adicional en la fase de preselección de las

[2] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto en contra.
[3] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[4] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

becas nacionales e internacionales que administra el Pronabec e incorpora el beneficio de reconocer con créditos académicos en los estudios de pregrado universitarios a las labores de voluntariado que estén debidamente certificados por una organización supervisada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Precisó que la SUNEDU debe velar por la mejor vía de aplicación de lo dispuesto.

Luego de que, a su solicitud, el secretario técnico diera lectura al texto legal propuesto, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

La congresista **INFANTES CASTAÑEDA** solicitó precisar la redacción del inciso b) del artículo 10 de la Ley del Voluntariado, reemplazando el término "canjear" por "reconocer", toda vez que el espíritu de la norma es reconocer las horas de voluntariado como créditos académicos de pregrado. En dicho sentido, sugirió colocar en el texto legal "el reconocimiento de" las horas de voluntariado debidamente acreditadas con créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitario en la formación técnico-productivo y superior-tecnológico, de acuerdo con lo establecido en los respectivos reglamentos académicos o de estudios que cada institución educativa haya establecido en el marco de su autonomía.

La **PRESIDENTA** aceptó la sugerencia formulada.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, dio el debate por agotado y sometió el predictamen al voto.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR

Congresistas que votaron a favor[5]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Chiabra León, Paredes Gonzales y Gutiérrez Ticona (miembros titulares).

Congresistas que votaron en abstención: Rivas Chacara y Elías Ávalos (miembros titulares)".

—o0o—

[5] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2588/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés la creación, la construcción y la implementación de los Colegios de Alto Rendimiento Deportivo – COARD.

Al respecto, sostuvo que el proyecto de ley busca garantizar una formación de excelencia a los estudiantes con desempeño sobresaliente en determinadas disciplinas específicas que no son tradicionalmente atendidas por la educación básica regular, utilizando una pedagogía que permita generar una relación entre el deporte y los cursos básicos a través de actividades interdisciplinarias.

Señaló que la Política Nacional del Deporte, aprobada por el Decreto Supremo 003-2017-MINEDU, tiene como objeto establecer lineamientos para la masificación y divulgación de la actividad deportiva, mejorando el desempeño deportivo del país y mejorando la calidad de vida de la sociedad; sin embargo, advirtió, este documento de gestión no contiene acciones objetivas que planteen intervenciones para revertir los problemas identificados en el diagnóstico, cuya evidencia es el bajo rendimiento de los equipos deportivos nacionales en competencias internacionales, pues no se cuenta con deportistas calificados de alto nivel.

Por lo anteriormente señalado, indicó que se busca replicar la experiencia positiva de los colegios de alto rendimiento COAR y declarar la necesidad pública y de preferente interés nacional para construir e implementar Colegios de Alto Rendimiento Deportivo y brindar el servicio educativo a estudiantes de alto desempeño deportivo desde el tercer año del Nivel Secundario de la Educación Básica Regular de todas las regiones del país. Asimismo, dijo que se dispone la elaboración de un Plan Nacional del Deporte, que observe la Política Nacional del Deporte aprobada por Decreto Supremo 003-2017-MINEDU, a fin de establecer los objetivos, estrategias, acciones y métodos de control de la referida política.

De conformidad con lo expuesto, solicitó el voto a favor del predictamen sustentado.

Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, dio por agotado el debate y sometió la propuesta al voto.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2588/2021-CR

Congresistas que votaron a favor[6]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona y Sánchez Palomino[7] (miembros titulares).

Congresista que votó en abstención: Elías Ávalos (miembro titular)".

—o0o—

En este estado, la **PRESIDENTA** anunció que, de acuerdo a lo establecido en la agenda, correspondía someter a debate y votación el predictamen recaído en los proyectos de ley 1049/2021-CR, 1565/2021-CR y 3517/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la "Universidad Nacional del VRAEM - UNVRAEM".

Al respecto, dado que no se concretó la sustentación de dos de los proyectos de ley acumulados y que ellos difieren en la ubicación en la que se encontraría la Universidad Nacional del VRAEM, dispuso que este punto de la agenda sea abordado en una próxima sesión.

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** sometió a consulta el acta de la presente sesión con dispensa de su lectura.

No habiendo ninguna oposición la dio por aprobada

—o0o—

II. CIERRE DE LA SESIÓN

Después de lo cual, la **PRESIDENTA** levantó la sesión.

Eran las 17 horas y 56 minutos.

---

[6] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.
[7] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 08:08:29-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:25:03-0500

.....
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA
PRESIDENTA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTIUD Y DEPORTE

.....
JUAN CARLOS MORI CELIS
SECRETARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del periodo anual de sesiones 2022-2023, que elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.